

EL MOVIMIENTO LABORAL ATENAZADO

El sector laboral es uno de los terrenos donde con mayor dificultad puede valorarse con objetividad la situación de la crisis por la cual se arrastra el país. Ello no es casual porque aquí es donde impacta más directamente, y por ende, donde se puede medir mejor, la compleja estructura de nuestra realidad nacional. Los obreros y los campesinos sufren directamente cualquier deterioro de la economía. Los trabajadores son el objeto principal de la lucha ideológica entre los proyectos antagónicos reformista-norteamericano y revolucionario insurgente. Son los mismos trabajadores quienes son disputados y a quienes se dirigen las campañas electorales de los partidos políticos que participan en el llamado "proceso democrático."

En consecuencia, todo intento de aquilatar en su correcta dimensión la problemática del movimiento laboral que se caracterice por su dogmatismo, por su simplismo o por su unilateralidad, sólo puede ser una aproximación ideologizada, interesada y en todo caso errónea. Atribuir la insatisfacción, el malestar y las protestas de la clase trabajadora a las líneas y estrategias de determinado agente político, tal como lo hacen los rivales políticos en contienda, desatiende, en primer lugar, un factor básico, las condiciones objetivas de vida de los trabajadores y de los desempleados. En segundo lugar, hasta el momento no parece que ninguna de las fuerzas del espectro político nacional haya sabido interpretar y dinamizar adecuadamente el sentir ni las expectativas del sector popular.

El acontecer del movimiento laboral en los meses de mayo y junio es el mejor indicador de ésto. La sensible disminución de la participación popular en las manifestaciones en estos dos meses, y más concretamente el 1 de mayo, constituye, en primera instancia, un revés a los métodos y a la conducción del movimiento laboral por parte de sus respectivas dirigencias. Tampoco habría por qué ver

en ello apoyo y simpatía a la actual gestión gubernamental por parte de los trabajadores, tal como suele interpretarlo fácilmente el gobierno demócrata cristiano.

El gobierno demócrata cristiano considera la simple inactividad laboral como elemento necesario para no sentirse "desestabilizado," independientemente de las razones que expliquen la disminución del número de manifestantes en las calles. Prescindiendo de la cantidad de manifestantes como indicador de la insatisfacción del sector laboral, y tomando como parámetro el número de paros parciales e indefinidos, las huelgas y los pronunciamientos de protesta, tanto del sector laboral abiertamente opuesto al gobierno actual, como del sector más cercano al mismo, tanto en el sector privado como en el público, el balance resulta abrumadoramente negativo para el gobierno (ver la "Crónica del mes" más adelante).

No se puede obtener un mejor referéndum del rechazo de la población a las políticas y los métodos de lucha que actualmente se le han estado ofreciendo por parte del sector gubernamental como antigubernamental. Ello debiera ser un llamado de alerta a una seria revisión de tales medidas, a fin de volverlas consonantes con el sentir de los trabajadores. Esta revisión debiera partir del análisis de las condiciones objetivas de vida de los trabajadores, los empleados y los desempleados, así como de la composición concreta que actualmente caracteriza a dicho sector. No se trata de un simple ejercicio mental. Siete años de guerra y de crisis económica han modificado sustancialmente la situación de los trabajadores respecto de lo que fuera el inicio del conflicto.

En esta revisión deberían tenerse en cuenta algunas variables importantes: el deterioro sin precedentes del poder adquisitivo de los salarios de los tra-

bajadores virtualmente congelados. Estos salarios se han reducido en un sexto de su valor respecto de 1978. Este cálculo ha sido corroborado por las investigaciones de todos los signos. No se puede eludir que el desempleo y el subempleo de la población económicamente activa andan alrededor del 70 por ciento. Si esto apunta a una situación social potencialmente explosiva, también se dan circunstancias atenuantes que no se deben descuidar. Aproximadamente un millón de salvadoreños ha abandonado el país en los últimos 7 años en calidad de refugiados. La mayoría de ellos pertenecía a la población económicamente activa. La ayuda económica enviada por esos salvadoreños que se encuentran en el extranjero es otra válvula de escape importante para la creciente presión económica soportada por la población. Las cifras más conservadoras registradas dan un total de entre 400 y 600 millones de dólares anuales, los cuales alcanzan a los estratos más bajos y medios de la población. En 1978, la CEPAL registró que el 46 por ciento de la población económicamente activa subsistía en el sector informal de la economía. Probablemente este sector absorbió un alto porcentaje de empleados que pasaron a engrosar las filas de los desocupados, aún cuando se desconoce el límite de su elasticidad o si éste ya se ha alcanzado. La población que subsiste en este sector no se ha vinculado a ninguna estructura organizativa que aglutine sus demandas o que recoja sus aspiraciones.

Tampoco debe subestimarse la cifra de 52 mil hombres incorporados en las filas de la Fuerza Armada, cuyas familias alivian su precaria situación

económica con los 400 colones mensuales que reciben en promedio los soldados de más bajo rango, según las estadísticas del ministro de defensa. Aun sin considerar las múltiples denuncias de presiones que el partido demócrata cristiano ha ejercido por medio de los órganos del Estado a fin de conseguir que los sectores bajo su mando no se pronuncien en su contra e incluso manifiesten simpatía hacia él (es el caso de la marcha organizada por el Partido Demócrata Cristiano el 7 de febrero), es significativo que los 90 mil miembros afiliados a dicho partido lo apoyen, esperando recibir algún beneficio a cambio.

Dentro de este análisis debe contarse con una significativa y creciente población marginal con escasa capacidad organizativa y que, por su misma condición, se encuentra relativamente aislada del acontecer económico y político. Muy recientemente este sector ha comenzado a movilizarse para hacer oír sus demandas. Los días 28 y 29 de marzo tuvo su primer congreso "hacia la unidad de las marginales desplazados y damnificados." Asimismo ha pasado a organizar tomas de tierras que les ofrecen seguridad, como en el caso de la comunidad "Tránsito 3" el 21 de junio pasado.

Todas estas consideraciones configuran objetivamente un panorama laboral con un perfil radicalmente distinto al de los años anteriores a 1980 y, además, gravitan de forma importante en la disminución del número de manifestantes en las marchas de protesta. Por otro lado, estas consideraciones no dan razón del auge significativo alcanzado entre 1985 y 1986; sus causas hay que buscarlas en el



ámbito de la conducción del movimiento popular. No obstante todo lo anterior, el elevado número de paros y la cantidad de trabajadores en huelga durante los meses de mayo y junio sí reflejan un alto grado de insatisfacción entre los empleados que dependen exclusivamente de sus salarios para subsistir.

El gobierno demócrata cristiano, por su parte, ha recurrido a todo excepto a conceder sus derechos a los trabajadores. El gobierno de Duarte ha utilizado recursos legales para desatender las demandas laborales. La ley laboral presenta graves limitaciones en sí misma apegándose a ella se ha tratado de resolver todo conflicto laboral que ha llegado al Ministerio de Trabajo. El margen que ya de por sí es estrecho, ha sido utilizado por el gobierno en el sentido más estricto. De todas las huelgas presentadas ante dicho ministerio, sólo el 5 por ciento ha sido declarado legal. La ley laboral no es un instrumento para dirimir las diferencias entre los patronos y los trabajadores, sino un arma eficaz para desbaratar las huelgas. La Unión Nacional de Obreros y Campesinos (UNOC), muy próxima al gobierno demócrata cristiano, ha cuestionado el código de trabajo elaborado hace 2 años por considerarlo una copia del de 1962.

Pese al celo con que el gobierno de Duarte clama por la legalidad para someter a los sindicatos y a las asociaciones de trabajadores, no ha mostrado ningún reparo en violar la misma ley laboral cuando así ha convenido a sus intereses. El medio más utilizado ha sido la postergación del diálogo con los trabajadores sobre sus plataformas reivindicativas. En este sentido conviene destacar el desatento de la actual gestión gubernamental y la intransigencia a viabilizar los "mecanismos legales," cuya utilización arteramente exige a los trabajadores. Esto ha cobrado singular relieve en el caso de la Asociación de Trabajadores de CEL (ATCEL). Esta asociación, a fin de hacer uso de las leyes pertinentes, tramitó por los canales legales la obtención de su personería jurídica ante el Ministerio del Interior. El proceso comenzó en mayo de 1985. Mientras tanto, la patronal se ha negado consistentemente a dialogar con los sindicalistas sobre sus reivindicaciones alegando que carecen de representación legal. Las múltiples gestiones de ATCEL llegaron hasta la asamblea, la cual aprobó el dictamen de su "Comisión del interior y obras públicas" el 7 de abril. En ese dictamen se recomendaba "seguir insistiendo ante el Ministerio del Interior para lograr su personería jurídica, o en su caso, que pidan amparo a la Corte Suprema de Justicia." El caso de los trabajadores del Instituto de Pensionados Públicos (SITINPEP), así como el de los del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) no ha tenido mejor suerte que el de ATCEL.

Los sindicatos y las asociaciones que obtuvieron su personería jurídica antes del arribo del gobier-

no demócrata cristiano han encontrado una respuesta muy similar a sus demandas. El gobierno se ha negado a dialogar y negociar las plataformas reivindicativas de los trabajadores. De esta forma, los conflictos laborales han sido llevados a situaciones extremas. Las huelgas declaradas ilegales, el despido o retiro del fuero sindical a los trabajadores públicos a quienes no se les reconoce este derecho se han presentado como "la aplicación de la ley." En esta situación se encuentran los paros iniciados en mayo y junio por la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANTMAG) y del seguro social (STISSS).

El gobierno parece haber obtenido mejor experiencia de los conflictos laborales del pasado que los propios trabajadores. Los desatentos a la ley y la desatención a las demandas de los trabajadores parecen orientadas a empujar a los sindicatos a la huelga o al paro indefinido. La actitud gubernamental en el conflicto surgido en el seguro social parece estar mucho mejor calculada que el brutal asalto militar a la institución efectuado por los cuerpos de seguridad en 1985. El caso de los trabajadores de ANDA organizados en el SETA, en 1985, parece constituir "el modelo" que el gobierno está tratando de seguir en los conflictos laborales del sector público. En aquella oportunidad 237 trabajadores fueron despedidos, incluida la directiva del sindicato en clara violación a la ley laboral. La posterior presentación de un recurso de amparo ante la corte suprema por parte del sindicato permitió la reincorporación a sus puestos de trabajo de la directiva del sindicato, pero no así en el caso de los demás afiliados. Este es un método "aséptico" que no recurre a la violencia ni a la disolución del sindicato, pero que asesta un duro golpe a las bases que apoyan las reivindicaciones sindicales.

Esta falta de disposición al diálogo y a conceder las peticiones laborales del gobierno demócrata cristiano contrasta fuertemente con la política de "incentivación" a la empresa privada y sus repetidos llamados a la reconciliación con ésta. Llamadas que, por lo general, han sido rechazadas públicamente por la empresa privada. El caso más crítico ocurrió cuando el alto mando de la Fuerza Armada invitó a los representantes del MAN a discutir la conducción de la guerra que había sido criticada por dicho movimiento. El llamado de los militares no fue atendido. Mientras tanto, los trabajadores que han estado reclamando una paz negociada y un salario digno han sido acusados sistemáticamente de "desestabilizadores." Este hecho es significativo porque el presidente Duarte en sus discursos, en concreto en el del 1 de junio, se dedicó ampliamente a lamentar los problemas de "pobreza crítica" en que se está debatiendo la mayoría de los salvadoreños, pero no le concede ninguna voz activa a esa misma mayoría en la solución de sus problemas. Esta, según la con-

cepción presidencial, parece tener que limitarse a recibir "desde lo alto."

Otro recurso utilizado por el gobierno demócrata cristiano ha sido el minimizar las marchas de protesta y contrarrestar las huelgas con el aparato propagandístico del Estado. En esta misma línea ha usado el recurso divisionista dentro del movimiento sindical; concretamente, ha utilizado como eficaz instrumento divisionista al Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL). La militarización de los centros de trabajo ha sido otro de los recursos utilizados contra el movimiento sindical en las oficinas de ASTTEL, del ISSS, de la Lotería Nacional de Beneficiencia (cuyos vendedores se fueron al paro en mayo por incumplimiento de las promesas hechas por los directores de la institución 8 meses antes) y en algunas de las dependencias del ministerio de agricultura. Estas medidas obedecían más a la intimidación que a la argumentación gubernamental de estar defendiendo el derecho a trabajar de quienes así lo desean o el de proteger las instalaciones de los locales en conflicto. Ni el derecho al trabajo ha sido una política prioritaria del gobierno demócrata cristiano ni la protección de los centros de trabajo ha sido de mucho provecho para el patrimonio nacional. Ejemplo de esto último es la protección que la Fuerza Armada dio a la Universidad de El Salvador durante la ocupación militar de 1980.

Existe una represión selectiva de los trabajadores en niveles controlados tal como lo muestra la desaparición de 3 sindicalistas del SICAFE el 1 de mayo, el bárbaro asesinato del secretario general de ANTA en San Miguel y las múltiples capturas de sindicalistas, que según la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) ha afectado a 100 de sus afiliados a partir de abril de 1986.

A todo esto se añaden, finalmente, las sucesivas campañas de desprestigio y las vinculaciones gratuitas con el FMLN de cuanta protesta laboral surge. El alto mando militar se suma a estas campañas advirtiendo y previniendo a los trabajadores. El gobierno demócrata cristiano se apura a "descubrir" en cada plataforma reivindicativa de los trabajadores una "estrategia" desestabilizadora del FMLN, siendo su blanco principal la UNTS. Como en ocasiones anteriores, antes de la movilización del 1 de mayo la Fuerza Armada dio a la publicidad "la incautación" de presuntos documentos del FMLN en los cuales se revelaba la línea de acción de la UNTS y de otras organizaciones populares para "desestabilizar" al gobierno. Entre estas acciones "desestabilizadoras" están las tomas de los templos capitalinos y de las embajadas, marchas violentas y confrontaciones con los cuerpos de seguridad, y la declaración de paros y huelgas en distintos centros de trabajo.



Prescindiendo de la autenticidad de estos documentos, lo más notable en el movimiento laboral opuesto al gobierno es la falta de una estrategia consecuente. Las acciones "desestabilizadoras" a las cuales se refiere la Fuerza Armada, consideradas con serenidad, no constituyeren más que la repetición mecánica de unas actividades que respondieron a otro momento de nuestra realidad y que distan mucho del análisis "histórico-dialéctico" que teóricamente debe caracterizar a los marxistas.

Tanto por el "inmediatismo" con el que la mayor organización laboral de oposición parece intentar conducir al movimiento laboral, dejando descuidada relativamente la lucha por la consecución de una paz negociada; así como por las descaminadas consignas con las cuales busca el consenso de la población, como es el pedir la renuncia de Duarte, lo que se observa en esa dirigencia es pobreza de análisis y no estrategias de ningún signo.

Asimismo han resultado contraproducentes las marchas de protesta porque su radicalismo y violencia ha ahuyentado a los sectores más moderados, que quizás con otro tipo de organización se sumarían a esas protestas para reclamar el diálogo, la negociación, las justas demandas de todas las organizaciones laborales en conflicto y el rescate de la soberanía nacional.

Así, pues, las fuerzas gubernamentales parecen tenerle tomado el pulso a la oposición laboral con logros relativos en cuanto a inmovilizar su legítima lucha y sin guardar ningún reparo por los estragos que su propia política económica y militar está produciendo entre los más necesitados. Por otro lado, las dirigencias sindicales de la oposición aún no han encontrado los mecanismos para rescatar todo el dinamismo de sus bases y de las mayorías de trabajadores y de desempleados. En tanto no se abando-

nen los sectarismos excluyentes y las intransigencias dogmáticas en favor de una mayor atención a las necesidades reales de la población, única estrategia capaz de movilizarla en favor de un proyecto consecuentemente popular, el movimiento popular

seguirá sin poder rescatar al país de su destrucción al ritmo de los vaivenes con los cuales el gobierno de Reagan balancea "nuestro proceso democrático."

P. E. A.

